LA ECONOMIA DEL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA

Jaime Puyana Fereira *

Con relación al impacto del tráfico de drogas en las economías de los países suramericanos, es mucho lo que se ha escrito en los últimos años. Sin embargo, cuando se trata de cuantificar dicho impacto, surgen problemas de medición al parecer insuperables. Esto es lo que hace que las cifras presentadas por distintos investigadores difieran sustancialmente unas de otras.

Cuando el resto de colombianos abrimos los ojos a esa realidad descorazonadora, ya era demasiado tarde. El Estado dentro del Estado no se había conformado con las praderas feras y los atardeceres desgarrados del Magdalena, sino que se expandía y se mimetizaba en los recovecos menos pensados de la nación. Un observador sagaz de nuestras realidades ha dicho que toda la sociedad colombiana está drogada. No por la adicción a la cocaína -que por cierto no es alarmante en Colombia- sino a una droga mucho más perversa: el dinero fácil.

En este trabajo intentaremos obtener una aproximación para la economía colombiana. Las cifras aquí utilizadas solo pueden considerarse como aproximaciones. La información proviene básicamente de dos trabajos efectuados por dos destacados economistas e investigadores colombianos para la revista de la Contraloría General de dicho país. Sin embargo, también se hará referencia a algunos otros estudios sobre el tema, tanto de organizaciones políticas como de otros investigadores independientes. Como podrá notarlo el lector, los enfoques respectivos difieren apreciablemente (1).

Antes de proseguir, sin embargo, creemos útil establecer una distinción hecha por el economista alemán Nicolás H. Hardinghaus (2). Según dicho autor, es conveniente distinguir entre economía informal, y economía subterránea.

La primera son actividades legales e ilegales que no se contabilizan o registran en las estadísticas oficiales y no son gravadas. La segunda, más limitada, son todas las actividades ilegales tales como juego de azar, contrabando, tráfico clandestino de alcohol y tabaco, y la narcoeconomía (3). Entre mayor sea la economía subterránea, y mayor la
participación de la narcoeconomía dentro de la misma, mayor será obviamente el grado en que las estadísticas oficiales de los agregados macroeconómicos en las Cuentas Nacionales, estarán distorsionando la realidad.

Desde luego, una situación como la anterior implica que los resultados de la política económica pueden ser contrarios a los buscados por los gestores de la misma, o su efectividad menor. Cabe destacar que, básicamente por razones políticas, no se efectúan estimativos del tamaño de la economía subterránea para ser incluidos en las Cuentas Nacionales, como sí es muchas veces el caso con la economía informal.

Sin embargo, las Cuentas Nacionales sí registran los efectos indirectos de la narcoeconomía, ya que ésta adquiere insumos, paga sueldos y salarios, invierte en maquinaria y equipo, tierra y finca raíz, construcción, etc. Y, ciertamente, los gastos del gobierno en su combate constituyen parte del total de los gastos gubernamentales, con el consecuente efecto multiplicador en el nivel de ingreso total. Lo anterior implica, por supuesto, que tales estimativos sean arbitrarios, inexactos y burdos; y difieren mucho entre sí, ya que en su elaboración se reflejan mucho los intereses afectados.

Prácticamente todos los autores, quiéranlo o no, se ven obligados para este tipo de estimativos a utilizar las Cuentas Nacionales. Estas, como es bien sabido, reflejan una metodología keynesiana que hace énfasis fundamentalmente en la demanda agregada y sus componentes. Hardinghaus, por ejemplo, presenta estimativos para algunos países, incluyendo los EUA. Desafortunadamente, su presentación, en el trabajo citado es más bien parco en precisar la metodología utilizada para obtener sus resultados, debido probablemente a su brevedad.

Según dicho autor, “El Producto nacional Bruto, que se quiere cuantificar, o sea, la demanda agregada. Y, visto del lado de los gastos, se compone por los gastos o compras del sector privado (SP), y los gastos o compras del gobierno (G), lo que puede expresarse en la ecuación Y = SP + G. El mercado creado por la narcoeconomía participa directa e indirectamente en SP, mientras que, obviamente, los gastos de defensa, represión de la droga, pertenecen a G”. (4). Sus cifras son las siguientes:

PAIS/(US $ MILLONES)
Bolivia
US$ 4.000 - PNB
US$ 3.000 - Narcoeconomía (NE)
US$ 1.500 - Parte Registrada en el PNB

Se estima que el 80% de la NE (Narcoeconomía) es generado por la exportación de hoja de coca. Puede verse, entonces, que acuerdo con estas cifras, toda la narcoeconomía representa el 75% de la economía boliviana. No se especifica para qué año son estos datos.

PAIS/(US $ MILLONES)
Perú
US$ 15.000 - PIB(1987)
US$3.200 - Narcoeconomía (NE)
21.3% Porcentaje(%) del PIB

Colombia
US$ 9.000 - Narcoeconomía (NE)
23% Porcentaje (%) del PIB

EUA (US$ billones)
US$ 240 Narcoeconomía (NE)
5.3% Porcentaje (%) del PNB

En este caso, Hardinghaus estima que el mercado de la droga en los EUA corresponde a unos US$ 125.000 millones de dólares. Calculando el costo de toda esta droga, como insumo, en US$ 10.000 millones se tendría un valor agregado de US$ 115.000 millones, que sería la parte clandestina del negocio en dicho país. La parte indirecta del PNB debida a tales actividades se considera de una magnitud aproximada igual.

Si a lo anterior se le añaden unos US$ 10.000 millones, que es lo que se calcula que gasta aproximadamente el gobierno de ese país en el combate contra las drogas a todos los niveles obtenemos la suma de US$ 240.000 millones, de los cuales solamente US$ 125.000 millones se registran en las cuentas nacionales.

Así podemos ver que los esfuerzos de cuantitativizar el impacto de la narcoeconomía mediante la utilización de las Cuentas Nacionales tienen muchas limitaciones.

En el caso de Colombia, tomaremos a dos autores que han publicado trabajos recientes sobre el tema: Hernando José Gómez (Económista, Investigador del Banco de la República), y Salomón Kalmanovitz (Económista, Profesor e Investigador de la Universidad Nacional). Como veremos, los enfoques y metodologías utilizadas, así como también los resultados y conclusiones obtenidas, tienen diferencias sustanciales. En el caso de Gómez, su enfoque es básicamente cuantitativo, muy similar al empleado por Hardinghaus. Fundamentalmente se trata de establecer qué porcentaje (%) del PIB representan los ingresos del narcotráfico. Se trataría de determinar cómo dichas entradas al país afectan la demanda agregada y los precios relativos (finca raíz, tipo de cambio, precios agrícolas, etc.)

En el caso de la marihuana, el autor destaca la declinación relativa de la misma como consecuencia de que, desde 1984, los programas de fumigación aérea propugnados por los EUA redujeron sustancialmente las áreas efectivamente cosechadas. Pero el autor, con un enfoque bastante convencional, sugiere que fue que “los gustos de los consumidores desplazaron hacia la variedad ‘sin semilla’, por lo cual el producto colombiano perdió favor en los mercados”(9). Más que esto; un proceso consciente de destrucción de cosechas en el exterior, y su sustitución por producción dentro de los EUA, fue realmente lo que tomó lugar. Las cifras son elocuentes, como lo ilustra el Cuadro #1: Los ingresos a Colombia por concepto de marihuana se reducen de unos US$ 170 millones en 1982 a tan solo US$ 27.9 en 1986. Sin embargo, desde ese año ha tomado lugar una recuperación. La producción se ha desplazado de la Sier Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, donde la fumigación aérea era relativamente fácil, hacia el sur del país (Departamento del Cauca), donde debido a la alta densidad de población y a la variedad de los cultivos, tal tarea es bastante difícil. El número de hectáreas cultivadas se ha recuperado a partir de 1987, y se cree que Colombia podría ocupar de nuevo un papel destacado en el comercio mundial de la marihuana (por lo demás, se estima que la productividad en el Cauca es de 3.5 tons. por hectárea, contra tan solo 1.5 en la Sierra de Santa Marta).

En lo que respecta a la cocaína, es
### Cuadro 1
Indicadores del comercio de marihuana
1982 - 1988

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Hectáreas cultivadas</td>
<td>8.250</td>
<td>9.400</td>
<td>10.000</td>
<td>8.000</td>
<td>12.500</td>
<td>13.085</td>
<td>9.200</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Hectáreas erradicadas</td>
<td>857</td>
<td>1.048</td>
<td>4.000</td>
<td>6.000</td>
<td>9.700</td>
<td>8.000</td>
<td>5.012</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Hectáreas cosechadas(1)-(2)</td>
<td>7.393</td>
<td>8.352</td>
<td>6.000</td>
<td>2.000</td>
<td>2.800</td>
<td>5.085</td>
<td>5.388</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Producción efectiva (b) (tons.)</td>
<td>11.090</td>
<td>12.528</td>
<td>9.000</td>
<td>3.000</td>
<td>3.080</td>
<td>5.597</td>
<td>5.927</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Marihuana capturada (tons.)</td>
<td>3.409</td>
<td>3.934</td>
<td>2.870</td>
<td>1.000</td>
<td>1.370</td>
<td>1.290</td>
<td>923</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Consumo interno (tons.)</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Exportaciones (tons.) (4)-(5)-(6)</td>
<td>7.531</td>
<td>8.444</td>
<td>5.980</td>
<td>1.850</td>
<td>1.510</td>
<td>4.107</td>
<td>4.808</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Porcentaje de la oferta en EE.UU</td>
<td>57</td>
<td>59</td>
<td>42</td>
<td>22</td>
<td>13</td>
<td>31</td>
<td>n.d.</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Precio al por mayor por ton.(US$) (c)</td>
<td>22.600</td>
<td>20.450</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500</td>
<td>18.500(e)</td>
<td>18.500(e)</td>
<td>18.500(e)</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Valor de las exportaciones (7)x(9) (millones de US$)</td>
<td>170.2</td>
<td>172.7(a)</td>
<td>110.6</td>
<td>34.2</td>
<td>27.9</td>
<td>76.0</td>
<td>88.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**e** Estimado.

a Para este año los estimativos del Departamento de Estado y el NIE no coinciden. Se utilizan los estimativos del NIE porque parece concordar más con la evolución del mercado en dicho año.

b Uno punto cinco toneladas de marihuana por hectárea cultivada. El ciclo de cultivo son 9 meses. A partir de 1986 el rendimiento habría bajado a 1.1 toneleadas por hectárea, debido al efecto mismo de la fumigación aérea.


**Fuente:** De varios documentos del Departamento de Estado y Drug Enforcement Administration y los NNICC Reports.
## Cuadro 2
### Indicadores del tamaño del tráfico de cocaína

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hectáreas cultivadas (miles)</td>
<td>3.4</td>
<td>5.12</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>15.5</td>
<td>25.0</td>
<td>25.0</td>
<td>25.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hectáreas erradicadas (miles)</td>
<td>0.4</td>
<td>2.0</td>
<td>2.0</td>
<td>2.4</td>
<td>2.0</td>
<td>0.8</td>
<td>0.5</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hectáreas cosechadas (1)-(2) miles</td>
<td>2.6-3.6</td>
<td>3.0-10.0</td>
<td>14.0</td>
<td>14.6</td>
<td>13.5</td>
<td>24.2</td>
<td>24.5</td>
<td>24.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoja de coca producida (ton. miles) (a)</td>
<td>2.1-2.9</td>
<td>2.4-8.0</td>
<td>11.2</td>
<td>11.7</td>
<td>10.8</td>
<td>19.4</td>
<td>19.6</td>
<td>19.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Factor de pérdida (5%) (ton. miles) (b)</td>
<td>0.11-0.14</td>
<td>0.12-0.40</td>
<td>0.6</td>
<td>0.6</td>
<td>0.5</td>
<td>1.0</td>
<td>1.0</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Producción neto (ton. miles) (4)-(5)</td>
<td>1.99-2.76</td>
<td>2.3-7.6</td>
<td>10.6</td>
<td>11.1</td>
<td>10.3</td>
<td>18.4</td>
<td>18.6</td>
<td>18.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Hojas de coca capturada (ton. miles) (c)</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
<td>0.2</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoja de coca consumida domésticamente (ton. miles)</td>
<td>0.4</td>
<td>0.4</td>
<td>0.4</td>
<td>0.5</td>
<td>0.5</td>
<td>0.5</td>
<td>0.5</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoja de coca consumida domésticamente (ton. miles) (6)-(7)-(8)</td>
<td>1.95-2.76</td>
<td>1.9-7.2</td>
<td>11.2</td>
<td>10.6</td>
<td>9.5</td>
<td>17.9</td>
<td>18.1</td>
<td>18.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Base de coca doméstica (500: 1) (ton)</td>
<td>3.95-5.40</td>
<td>3.8-14.4</td>
<td>22.4</td>
<td>21.4</td>
<td>19.0</td>
<td>35.8</td>
<td>36.2</td>
<td>37.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Base de coca consumida internamente (ton.)</td>
<td>n.d.</td>
<td>n.d.</td>
<td>0.4</td>
<td>6.2</td>
<td>10.0</td>
<td>10.0</td>
<td>10.0</td>
<td>10.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Base de coca procesada (ton) doméstica (10)-(11)-(12)</td>
<td>4.7</td>
<td>9.1</td>
<td>22.0</td>
<td>15.0</td>
<td>6.0</td>
<td>25.8</td>
<td>26.2</td>
<td>27.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Importada</td>
<td>57.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>100.0</td>
<td>80.0</td>
<td>80.0</td>
<td>90.0</td>
<td>90.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Cocaína producida (ton.) (d)</td>
<td>53.0</td>
<td>93.8</td>
<td>104.9</td>
<td>98.9</td>
<td>74.0</td>
<td>91.0</td>
<td>99.9</td>
<td>101.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cocaína capturada (ton.)</td>
<td>0.1</td>
<td>0.9</td>
<td>2.5</td>
<td>22.0</td>
<td>10.0</td>
<td>4.0</td>
<td>6.0</td>
<td>23.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Cocaína consumida domésticamente(ton)</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total exportado(ton) (14)-(15)-(16)</td>
<td>50.0</td>
<td>90.0</td>
<td>99.4</td>
<td>73.9</td>
<td>61.0</td>
<td>84.0</td>
<td>90.9</td>
<td>75.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Precio al por mayor por kilogramo (US$) (h)</td>
<td>52.000</td>
<td>52.000</td>
<td>27.000</td>
<td>26.000</td>
<td>30.000</td>
<td>22.000</td>
<td>15.000</td>
<td>15.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ingresos brutos (millones US$) (17) x (18)</td>
<td>2.660.000</td>
<td>4.680.000</td>
<td>2.660.8</td>
<td>1.921.4</td>
<td>1.850.0</td>
<td>1.848.0</td>
<td>1.366.3</td>
<td>1.126.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. La productividad es alrededor de 800 kg por hectárea.

b. El factor de pérdida toma en cuenta pérdidas durante el transporte y similares.

c. Dado el bajo nivel de hojas de coca decomisadas, se asume que su nivel fue 0 cuando no hay información disponible.

d. De las estadísticas del NIE, se deduce que la tasa de conversión de la base de coca a cocaína es de 1.163 a 1.

e. Exportación aparente tanto a Estados Unidos como a Europa.

f. Se presentan pequeñas discrepancias con el cuadro 2, debido a cambios en las fuentes de información.

g. Se toma el dato del año anterior.

h. Precios al por mayor al sur de La Florida.

Fuente: Documentos del Departamento de Estado y del Drug Enforcement Administration.
bien conocido que Colombia es un país fundamentalmente procesador o transformador de la base elaborada con la hoja de coca, la cual proviene primordialmente de Bolivia y Perú, convirtiéndola en HCL (la cocaína propiamente dicha). Sin embargo, como puede verse en el cuadro #2, el área colombiana cultivada con coca aumentó sustancialmente desde principios de la década, pasando de unas 5.000 hact. en esa época a unas 25.000 entre 1986-1988, estas están ubicadas en Caquetá, Guaviare, Vaupés y Putumayo, esto es en las zonas sur-occidentales del país, donde predominant regiones selváticas o de llanura. Es por ello que el contenido de base doméstica dentro del total transformado en cocaína, que era tan solo del 10% a comienzos de la década, pasa a constituir un 33% en 1988. es decir, toma lugar una cierta integración vertical, pero no lo suficiente para disminuir apreciablemente las importaciones de base. Hay, sí, una mayor producción, aunque no muy superior a la registrada históricamente. La reducción de la producción estimada para 1984 se atribuye a la destrucción de un gran complejo de refinación, irónicamente llamado "Tranquilandia". Los narcotraficantes colombianos, como es bien sabido, lograron inundar en pocos años el mercado de los EUA, con el resultado de que tomó lugar un apreciable descenso en los precios de la cocaína; de US$ 50.000 por kilo a inicios de la década, a niveles cercanos a los US$ 15.000 a finales de la misma. Las fuentes utilizadas por el autor son el departamento de Estado y la DEA. (En el estudio de Kalmanovitz, como lo veremos luego, los precios por kilo de cocaína son de US$ 60.000 en 1982 y de US$ 18.000 en 1988, debido a que sus fuentes son diferentes. (En general, según Kalmanovitz, los estimativos de la DEA tienden a subestimar el problema cuando se trata del consumo den-

### Cuadro 3
Ingresos netos del tráfico de cocaína (a)
(millones US$)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Ingreso bruto</td>
<td>2.600.000</td>
<td>4.680.000</td>
<td>2.683.8</td>
<td>1.921.4</td>
<td>1.830.0</td>
<td>1.840.0</td>
<td>1.363.5</td>
<td>1.126.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Precio de base de coca (b)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(por kg en US$)</td>
<td>6.800</td>
<td>6.800</td>
<td>2.500</td>
<td>3.400</td>
<td>2.700</td>
<td>2.500</td>
<td>2.500</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Costo de la base de coca</td>
<td>387.6</td>
<td>680.0</td>
<td>250.0</td>
<td>340.0</td>
<td>216.0</td>
<td>200.0</td>
<td>225.0</td>
<td>198.0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Otros costos-consumo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intermedio (c)</td>
<td>35.5</td>
<td>60.3</td>
<td>66.6</td>
<td>49.5</td>
<td>40.9</td>
<td>56.3</td>
<td>60.9</td>
<td>51.7</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Costos transporte (d)</td>
<td>150.0</td>
<td>220.0</td>
<td>298.2</td>
<td>221.8</td>
<td>183.0</td>
<td>252.0</td>
<td>272.7</td>
<td>231.6</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Ingreso neto=(1)-(3)-(4)-(5)</td>
<td>2.028.9</td>
<td>3.669.7</td>
<td>2.069.0</td>
<td>1.310.1</td>
<td>1.390.1</td>
<td>1.339.7</td>
<td>805.1</td>
<td>645.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. El ingreso neto supone que toda la cocaína se vende al por mayor en puerto americano, precio CIF.
b. Para 1986 es una extrapolación. Se supuso que el precio se mantuvo en 1987 debido a la operación "Black Furnace" en Bolivia.
c. Incluye eter, acetona, otros químicos, planta y equipos livianos, US$ 670 por kilo.
Fuente: Documento del NNICC y Departamento de Estado.

Económicas CUC/41
tro de los EUA).

Con base en los datos provistos por el Cuadro #2, Gómez efectúa los siguientes estimativos (cuya elaboración detallada se encuentra en el Cuadro #3):

Ingresos Brutos:
1988 - US$ 4 1.126.5 miliones.

De dichos ingresos brutos se deducen los costos. Estos están constituidos por las compras de base de coca, insumos intermedios, químicos y transporte. Al hacerlo, obtenemos los siguientes guarismos:

Ingresos Netos:

El autor, sin embargo, advierte que “estos cálculos basados en diversos estimativos de entidades gubernamentales de los Estados Unidos, no toman en cuenta el desarrollo reciente de los mercados europeos que podrían incrementar fácilmente exportaciones por 20 toneladas adicionales a precios muy superiores a los de Estados Unidos, alrededor de US$ 30.000 el kilo. Lo anterior implicaría que podríamos estar subestimando a los ingresos netos durante la segunda mitad de la década de los 80, en 300 a 400 millones de dólares anuales”.

Gómez estima que la oferta potencial de cocaína, con base en la producción de hoja de coca en los tres países (Bolivia, Colombia y Perú), y deduciendo el consumo interno y los decomisos, puede alcanzar un nivel de 400 toneladas anuales.

Esto parece ser el doble de la demanda mundial, hecho que pone seriamente en tela de juicio la efectividad de afrontar el problema unilateralmente, como hasta ahora se ha estado ha-

---

**Cuadro 4**

**Ingresos netos del tráfico de drogas como porcentaje del PIB**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Año</th>
<th>PIB (a) (mill. US$)</th>
<th>Marihuana (mill. US$)</th>
<th>% PIB</th>
<th>Cocaína (mill. US$)</th>
<th>% PIB</th>
<th>Total (mill. US$)</th>
<th>% PIB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1981</td>
<td>36.387</td>
<td>205.0</td>
<td>0.56</td>
<td>2.028.9</td>
<td>5.58</td>
<td>2.233.9</td>
<td>6.14</td>
</tr>
<tr>
<td>1982</td>
<td>38.969</td>
<td>170.2</td>
<td>0.44</td>
<td>3.669.7</td>
<td>9.42</td>
<td>3.839.9</td>
<td>9.86</td>
</tr>
<tr>
<td>1983</td>
<td>38.731</td>
<td>172.7</td>
<td>0.46</td>
<td>2.069.0</td>
<td>5.34</td>
<td>2.241.7</td>
<td>5.80</td>
</tr>
<tr>
<td>1984</td>
<td>38.253</td>
<td>110.6</td>
<td>0.29</td>
<td>1.310.1</td>
<td>3.42</td>
<td>1.420</td>
<td>3.71</td>
</tr>
<tr>
<td>1985</td>
<td>34.897</td>
<td>34.2</td>
<td>0.10</td>
<td>1.390.1</td>
<td>3.98</td>
<td>1.424.3</td>
<td>4.08</td>
</tr>
<tr>
<td>1986</td>
<td>34.942</td>
<td>27.9</td>
<td>0.08</td>
<td>1.339.7</td>
<td>3.83</td>
<td>1.367.6</td>
<td>3.91</td>
</tr>
<tr>
<td>1987</td>
<td>36.186</td>
<td>76.0</td>
<td>0.21</td>
<td>805.1</td>
<td>2.22</td>
<td>881.1</td>
<td>2.43</td>
</tr>
<tr>
<td>1988</td>
<td>39.090</td>
<td>88.9</td>
<td>0.23</td>
<td>645.2</td>
<td>1.65</td>
<td>734.1</td>
<td>1.88</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Calculado como PIB corriente en pesos dividido por la tasa de cambio promedio del año.

Fuente: Dane y cuadros 1 y 3.

42/Económicas CUC
ciendo, mediante el control de la oferta. Es obvio que es también indispensable un control de la demanda.

En resumen, el autor establece que "Según las cifras obtenidas, los ingresos netos del tráfico de drogas habrían pasado de niveles superiores de 6% del PIB a comienzos de la década a proporciones no superiores a 2.5% del PIB en los últimos años. No obstante, si se tuviera la información necesaria para estimar el valor de las exportaciones de la cocaína a Europa, muy probablemente la cifra se incrementaría para situarse alrededor de 3% a 3.5% del PIB". (7) Como puede verse en la tabla #4, la participación de la mariguana en el PIB era tan solo del 0.56% en 1981, descendiendo a un 0.8% en 1986 y ascendiendo de nuevo para situarse en un 0.26% en 1988.


Así, vemos que en los estimativos de este autor, vinculado a una de las más importantes instituciones estatales de Colombia como es su Banco Central, el problema –en términos del indicador cuantitativo por él utilizado– no es tan grave como algunos lo hacen aparecer. Y este se disminuye aún más, si estudiamos los usos a los que básicamente se destinan supuestamente los dólares del narcotráfico: a financiar el contrabando y la fuga de capitales.

En la metodología de Gómez, la fuga de capitales incluye todas las divisas que los narcotraficantes deciden retener e invertir en el exterior, es decir, que no pasan por el país. También incluye en dicha partida los dólares legales que son extraídos del país vía subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. En general, su estimativo total –detallados en el cuadro #5– sería que los capitales colombianos acumulados en el exterior, para 1988, ascendrían a unos US$ 4.200 millones de dólares, a los cuales añade US$ 14.200 millones de dólares de ingresos netos por concepto de tráfico de drogas para el período 1981-1988, es decir, que los fondos para financiar contrabando y fuga de capitales ascendieron a US$ 18.400 para el período mencionado.

En cuanto a los usos, estos los podemos ver también detallados en el cuadro #5, de forma tal que no nos detendremos en comentarios sobre los mismos. El punto a subrayar es que dado que su monto asciende a US$ 11.600 millones de dólares, queda con respecto a las fuentes un excedente de US$ 825 millones, cuyo destino es imposible de determinar a priori. Dejando de lado ese hecho, el autor concluye que como las actividades financiadas por los fondos de la narcoeconomía son el contrabando, y la fuga de capitales, entonces el impacto sobre la demanda agregada interna no es muy grande.

Aunque lo anterior es, en principio, cierto si hablamos en términos de análisis macroeconómico convencional, debe subrayarse que tal tipo de análisis soslaya aspectos muy importantes del problema. Tomemos, por ejemplo, el caso de las inversiones efectuadas por los narcotraficantes. La casi totalidad de los estudios basan la composición de estas en los resultados de una encuesta efectuada por Mario Arango (8), que en nuestra opinión dados el tamaño de la muestra y las condiciones bajo las cuales ésta fue realizada, nos hacen tener
serias reservas al respecto. Sin embargo, usualmente se han tomado los resultados de la misma casi como si fueran realmente la composición misma por sectores de las inversiones del narcotráfico en Colombia. En realidad, más correcto sería utilizar dichos resultados, aunque reconociendo sus limitaciones, en el marco de una tabla de insumo-producto, a fin de localizar también los efectos indirectos, en la medida en que los principales sectores directamente impactados sean a su vez demandantes y proveedores de otros sectores de la economía.

Según los resultados de la mencionada encuesta, la composición de las inversiones efectuadas por los traficantes sería la siguiente:
- Bienes raíces: 45%
- Urbanos y campestres: 20%
- Ranchos ganaderos: 15%
- Comercio: 10%
- Construcción: 10%
- Servicios y recreo: 10%

Con base en la anterior información,

### Cuadro 5

**Fuentes y usos de divisas al margen de las cuentas oficiales**

(acumulado 1981-1988)

(US$ millones)

<table>
<thead>
<tr>
<th>1 Fuentes</th>
<th>14.200</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tráfico de drogas (a)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fuga-balanca de pagos oficial (b)</td>
<td>4.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>18.400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2 Usos</th>
<th>8.800</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Contrabando (c)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fuga capitales observada (d)</td>
<td>2.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>11.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3 Remanente (otros usos) (e)</th>
<th>6.800</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

**Notas:**

a. Sumatoria del total de ingresos netos del cuadro 5.

b. Banco Internacional de Pagos 59o. Reporte Anual, pág. 88, para cifras hasta 1987. El último año, cálculos del autor; la metodología consiste en sumar año tras año las fuentes de financiación, tales como la inversión extranjera neta, la caída de reservas y el incremento en el deuda externa y compararlo con el déficit de la cuenta corriente. La diferencia se supone es principalmente acumulación de activos privados en el exterior.

c. El cálculo del contrabando proviene de Peralta, 1.100 millones de dólares por año.

d. La fuga de capitales observada corresponde al saldo neto, de depósitos registrado por el banco de pagos internacionales en bancos comerciales de todo el mundo, de las inversiones de las reservas internacionales según, se registra en la Revista del banco de la República, cuadro 5.1.1.

e. Diferencia entre 1 y 2.

Fuentes: Ver notas.

44/Económicas CUC
el autor subraya que el efecto principal de estas actividades ha sido tremenda distorsión en los precios relativos, y una cierta "desindustrialización", debido ésta última en gran parte a que el abaratamiento del tipo de cambio negro, debido a la abundante oferta del mismo en el mercado paralelo, llevó a que este tuviera un premio negativo (es decir, que fuese más barato que el dólar oficial), estimulándose de esta manera el contrabando en una manera apreciable, con la consecuente penalización a la tasa de crecimiento de la industria nacional. El gráfico #1 ilustra claramente dicho proceso. Es decir, que se generaron problemas conocidos en la literatura como la "enfermedad holandesa": cuando el inesperado y sustancial ascenso del precio de un producto de exportación, por lo general de tipo agrícola o minero, genera una cuasi-renta para un país determinado, se sobrevalúa sustancialmente el tipo de cambio, favoreciéndose así las importaciones de todo tipo. esto, desde luego, redunda en un tremendo perjuicio para los "bienes comercializables", esto es, aquellos producidos localmente que compiten con los importados. Es decir, afrontamos una "enfermedad holandesa", aunque esta, dado su peculiar carácter, parece ser de tipo venéreo.

Otra distorsión de precios relativos importantes subrayada en este estudio es el desmesurado aumento de los precios de la finca raíz, aspecto muy real que subrayaremos posteriormente.

Con este tipo de enfoque, en un cierto

Gráfica 1

**Premium del tipo de cambio negro**

(1971 - 1988)

sentido muy propio de extracto final bancario, las conclusiones no son sorprendentes: a) Los ingresos por concepto de narcotráfico han disminuido en los últimos años, con la participación de la cocaína dentro de los mismos tendiendo a descender debido a una recuperación relativa de las percepciones por concepto de marihuana. Actualmente, representarían entre el 2.0% y el 2.5% del PIB, sin contar el promisorio mercado europeo. b) Estos fondos se canalizan fundamentalmente para el financiamiento del contrabando, y de la fuga de capitales. c) Al estar dirigidos hacia el financiamiento de importaciones (ilegales) y colocación de fondos en instituciones financieras externas, estos no afectan la demanda agregada interna de una manera sustancial. d) Las utilizaciones de dichos fondos que afectan la demanda agregada interna distorsionan los precios relativos, en el sentido de sobreevaluación el tipo de cambio, perjudicando así a la industria nacional, o elevando desmesuradamente el precio de la finca raíz en general. En consecuencia, los ingresos generados por el narcotráfico como proporción del PIB, no han sido demasiado elevados y el efecto neto sobre la actividad económica legal pudo haber sido incluso negativo durante la década de los 80°. (9)

Así, vemos que cuando se plantea el problema a un nivel agregado, tal como lo hace Gómez, las conclusiones que se derivan tienden a minimizar la magnitud del impacto del narcotráfico en una determinada economía. Si, por otra parte, procedemos a desagregar un poco más las cifras, tal como lo hacen Kalmanovitz y algunos autores, a fin de intentar efectuar un análisis de tipo cualitativo que complemente y refuerce las precarias cifras disponibles, podremos aproximarnos un poco más a la realidad. en lo que sigue, con base en los estudios de Kalmanovitz, Fabio Giraldo Isaza (10), y documentos publicados por algunas organizaciones políticas de izquierda (“A Luchar”, PRT, etc.), intentaremos recopilar los resultados obtenidos por enfoques del problema que van más allá del aspecto meramente cuantitativo.

En general, puede afirmarse que virtualmente todos los estudios, independientemente de las cifras utilizadas, llegan a la conclusión de que solo una pequeña parte de los ingresos brutos de la narcoeconomía entran al país. La cifra total fluctúa entre algo más de US$600 millones (Gómez: US$ 645.2 en 1988), y unos US$ 3.500 millones. La cifra más comúnmente aceptada es la de US$ 1.500 millones en términos brutos, por ejemplo, Kalmanovitz estima que las percepciones totales del narcotráfico en 1988, ascendieron a US$ 4.912 millones, contra tan solo US$ 1.126.5 estimados por Gómez. De dicha cantidad, Kalmanovitz cree que ingresan al país anualmente unos US$ 3.500 millones, lo cual puede representar “entre el 6 % y 8% del PIB y un porcentaje similar del empleo, lo cual no es desestimable para nada -como lo pretenden quienes por razones morales o clínicas aducen en el país que el negocio es pequeño y no tiene “tanta importancia”. Ya destacamos que las fuentes de Kalmanovitz son diferentes a las de Gómez, y, en nuestra opinión probablemente más aproximadas a la realidad que la de la DEA y el Dpto. de Estado, ya que provienen de un estudio detallado sobre el tema elaborado por la prestigiosa Universidad de los Andes de dicho país (11).

En el trabajo de Giraldo Isaza y los
documentos de las organizaciones citadas, se acepta la cifra de US$ 1.500 a US$ 2.000, aunque no se discute mayormente la misma. Cabe anotar que la cifra proporcionada por Kalmanovitz incluye un estimativo de los posibles ingresos por concepto de ventas al creciente mercado europeo, lo cual no es el caso en los otros trabajos citados. En todo caso, y esto es lo fundamental, estos ingresos han servido como "cochón" a la economía colombiana durante toda la década de los 80, impidiendo parcialmente que esta siguiera la trayectoria de las demás economías del área.

Autores como Kalmanovitz, conside-ran que la narcoeconomía "cumple un papel crucial en el equilibrio de las relaciones macroeconómicas, sobre todo con el exterior, al proveer de liquidez en dólares a la economía". (12) Efectivamente, es destacar, que por ejemplo, el hecho de que Colombia no haya tenido que reestructurar a través de negociaciones, como México, su creciente deuda externa, se debe en parte a que su servicio ha sido alivianado mediante los flujos de dólares negros. Estos, por otra parte, permiten mantener niveles de ahorro e inversión mayores de los que existirían si los narcodólares no contribuyeran a financiar nuevas inversiones de la nueva burguesía vinculada al tráfico de dólares, o fuga de capitales por parte de quienes venden sus activos a la misma.

Según este autor, un indicador importante es el total de acervos adquiridos por este sector social en ascenso. Se estima que en la actualidad, los narco-traficantes han adquirido "en menos de una década un patrimonio que mínimamente alcanza el 30% de la riqueza que poseen todos los colombianos dentro y fuera del país, acumulados durante más de 100 años de historia contemporánea." (13). En todo caso, al tomar lugar dicho proceso, muchos autores tienden a plantear que ha surgido una burguesía gansteril, en conflicto con los grupos oligárquicos tradicionales. Aunque hay un elemento de verdad en esto, no puede afirmarse que la distinción sea demasiado nítida. Esto lo destaca el economista Jorge Child, al afirmar que "si hoy el gobierno de Barco pretende desmontar esta economía del narco-capitalismo, donde los dineros "sucios" ya están confundidos con los tradicionales o "limpios", habría que acabar con buena parte del capital del país... En Colombia, en los últimos veinte años, este capitalismo en crisis de crecimiento real, violento y militarizante, encontró un nuevo socio capitalista: el narcotráfico" (El Espectador, Agosto 29, 1989, Bogotá). Esto, por lo demás, se verá claramente cuando se analice el caso de la agricultura. En todo caso, algunos autores destacan que subyacente tras el conflicto entre las mafias de Medellín y Cali, se encuentra esta distinción social. Así, podemos leer en el documento de la organización "A Luchar" que "Ha sido el cartel de Medellín que con un mayor poder, gracias a su estilo sanguinario y violento, ha logrado hacerse sentir más, tanto interna como externamente. El cartel de Cali, más sofisticado y menos "burdo", ha logrado, con mayor facilidad, insertarse política, económica, social y culturalmente en las instituciones estatales, la industria, la banca, los partidos políticos, el deporte, etc. (14).

Independientemente de lo anterior, el hecho real es que quienes están vinculados a la narcoeconomía provienen prácticamente de todos los sectores sociales del país, y esta ha transformado de una manera radical todo el perfil Económicas CUC/47
económico, social, y político de Colombia.

Si tomamos el caso de la agricultura, por ejemplo, podremos explicarnos mucho el carácter de la violencia que actualmente impera en varias de las regiones agropecuarias más importantes de dicho país.

Como bien es sabido, Colombia muestra un alto grado de concentración de la propiedad de la tierra. Según un estudio efectuado por un grupo de investigadores del CEGA (Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas), “en 1984 el 62.4% de los propietarios de predios rurales tenían apenas el 5.1% de la superficie bajo régimen de propiedad; en el otro extremo solo el 1.6% de los propietarios disponía del 40% de la tierra”.

Los autores destacan que el impacto de la Reforma Agraria iniciada en 1961, ha sido poco menos que nulo: “Frente a lo que había en 1960 el cambio no alcanza a ser importante: al 66.7% de los propietarios correspondía el 6.0% de la tierra, mientras que al 1.4% pertenecía el 45.8%. Medida en términos del Índice de Lorentz, la desigualdad distributiva de la propiedad rural pasó de 83.25% en 1960 a 82.25% en 1984; Colombia tiene así una de las estructuras agrarias con más alta concentración de la propiedad entre los países de América Latina, y además una de las que presenta menos cambios en las últimas décadas”. (15).

Efectivamente, a los 25 años de entrar en efecto, la Reforma Agraria, formulada en medio del optimismo generado por la “Alianza para el Progreso” Kennediana, había afectado tan solo algo menos de 900.000 hectáreas, en la siguiente forma:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reforma Agraria: 1961-1985</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hectáreas</td>
</tr>
<tr>
<td>Adquisición por Compra</td>
</tr>
<tr>
<td>Expropiación</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesión</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Por otra parte, la propiedad como forma de tenencia se incrementa pasando de un 75% en 1960 a un 88% en 1988, las tierras en arrendamiento pasan a ser un 9% en 1960 a un 3.2% en 1988. En cuanto al colonato, ese representaba un 14% en 1960, mientras que en 1984 era tan solo un 5.6%. Estas tendencias son mucho más marcadas justamente en aquellas zonas donde se cree que los narcotraficantes han invertido más. Allí, la “propiedad” representa un 95% mientras que el colonato solo constituye un 3.3% del total.

Ahora bien, los distintos estudios coinciden en establecer que en tan solo unos cinco años, los narcotraficantes adquirieron más de un millón de hectáreas, de un total de 23.25 millones de pastos y tierras roturadas, es decir, el 4.3% de ellas. En el estudio de Sarmiento y Moreno arriba citado, se menciona que con base en informes del Ministerio de Agricultura y el SEAM (1988), la extensión del sector rural colombiano es de 36’197.200 hectáreas. De estas, los narcotraficantes tendrían posesión de un 2.8%.

Vemos entonces, que lo que está tomando lugar es un proceso de Contra reforma Agraria, donde los narcotraficantes en tan solo unos cuantos años concentraron en su manos propiedades con un área mayor que lo repartido durante
25 años a través del tímido intento de reforma agraria. Inicialmente, estas compras afectaban solamente zonas de frontera y colonización, donde podían establecerse centros de procesamiento de base de coca. Posteriormente, las inversiones se desplazaron hacia las zonas más fértiles de los valles del Magdalena y del Cauca. Según Kalmanovitz, "Las inversiones de las mafias se han concentrado en la adquisición de fincas en las cercanías de las ciudades y particularmente en zonas caracterizadas por malestar campesino y presencia guerrillera. Los que utilizan el análisis geopolítico afirman que la guerrilla había conformado una gigantesca T que se extendía de oriente a occidente en la parte norte del país y clavaba una línea hacia el sur, a lo largo del río Magdalena hasta las regiones de colonización campesina. Los narcoterratenientes han logrado interrumpir la T imaginaria en el Magdalena medio, en el nororiente antioqueño, Córdoba, los Llanos Orientales y otros sitios adicionales con el concurso de los terratenientes locales, el ejército y sus bandas privadas, de tal modo que han logrado una inserción privilegiada dentro del sistema político colombiano, en el que tiene un inmenso peso la extrema derecha" (16). Según estimativos de la revista SEMANA (#343, Noviembre 29, 1988, Bogotá, Pág. 35), entre 1979 y 1988 los narcotraficantes han invertido unos US$ 5.500 millones en tierras, lo cual equivale a una tercera parte de la deuda Externa Colombiana y a dos terceras partes del presupuesto público de dicha nación. Según dicha revista, "Si las tendencias se mantienen es muy probable que los narcotraficantes adquieran en 1989 cerca de 250.000 Has., el doble del que aspira a comprar INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) para repartir a los campesinos sin tierra". (Idem, Pág. 35).

El resultado de lo anterior no debe sorprender a nadie: un proceso de alianzas entre terratenientes, ejército, narcotraficantes y sus bandas paramilitares, e, indirectamente y por debajo de la mesa, el gobierno mediante su silencio cómplice. Desde luego, el objetivo principal ha sido todos los movimientos progresistas, ya que de lo que se trata es de asegurar la rentabilidad de las inversiones. El asesinato vil de tres candidatos presidenciales, dos de ellos pertenecientes a la fuerza izquierda, y uno al liberalismo reformista, corroboran palmariamente dicho proceso. Y, a ese respecto, no son tan tajantes las divergencias entre dineros "limpios" y " sucios". Por lo general, en aquellas regiones donde el narcotráfico procede a efectuar sus inversiones -que son, por cierto, de una alta sofisticación tecnológica-, toma lugar un proceso de "limpieza" de movimientos sociales y políticos, que van desde asesinatos individuales hasta masacres colectivas de campesinos. Como consecuencia de dichas "limpiezas", toma lugar una obvia revaluación de los precios de la finca raíz. Así, en Puerto Boyacá, que era una zona minada por las FARC y de donde fue desalojado dicho movimiento por la alianza entre terratenientes y campesinos medios de la región, narcotraficantes y sus bandas paramilitares, y el ejército, el precio de la hectárea de tierra subió de Col$ 100.000 en 1983 a Col$ 1'000.000 en 1989.

Con su prosa insuperable, el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez describe estos desarrollos: "La forma en que esto empezó es ya historia..."
sabida. En la década de los sesenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) que son el brazo secular del partido comunista, habían implantado en el Magdalena Medio varios frentes de guerrilla, con el ánimo expreso de defender de los terratenientes insaciables a los campesinos inermes. Pero los propósitos originales de las FARC degeneraron en una manera simple de financiar su guerra mediante el secuestro, el chantaje y la extorsión de los ganaderos. Estos, exasperados por la persistencia de la sevicia, armaron ejércitos particulares que inclusive fueron legitimados por el gobierno como grupos de autodefensa. “Inicialmente todo era una campaña para la eliminación física del comunismo”, escribió un periodista que visitó la región hace seis años: “Pero después arremetieron contra los ladrones de ganado en el campo, y contra los rateros de los pueblos, y hasta con los mendigos y los homosexuales”. Los ganadores sobrevivientes quedaron en la ruina y amenazados por las pandillas de forajidos que ellos mismos habían armado.

Fueron estos ganaderos empobrecidos los que hicieron contacto con los narcotraficantes ansiosos de nuevas causas para gastarse sus tesoros sobrantes. De esa alianza surgió lo que hoy es el Magdalena Medio, un vasto imperio de cincuenta mil kilómetros cuadrados, dos veces más grande que El Salvador... Todo esto sucedió durante varios años a menos de trescientos kilómetros del palacio de los presidentes y a tiro de piedra de la guarnición militar, y solo se hizo público hace unos meses, cuando un desertor contó el cuento completo.

Los narcotraficantes aportaron el dinero, la técnica y su indiscutible ta-

lento empresarial. La violencia artesanal se volvió científica, con mesianismos paramilitares y escuelas de esbirros, dirigidas por mercenarios comprados a precio de oro puro en Londres y Tel Aviv... De esta escuela salieron los criminales adolescentes, reclutados en los barrios miserables de las ciudades, que en estos años han sembrado el terror y la muerte en el país. Sin embargo, por una burla dialéctica irreparable, lo que las FARC concibieron como una revolución, terminó por serlo en la realidad, pero al revés: un mundo aparte, ya no con sus servicios primarios de seguridad, sino con legítimos cuerpos de policía al mando de alcaldes y consejales de elección popular. Los planes sociales de vivienda, salud y educación, parecen concebidos como un desafío al gobierno central. Sus intrépidos dirigentes, complacidos de sí mismos, crearon un partido político de derecha más que extrema, que trató de obtener hace poco su registro legal. Su emblema es la mira telescópica de un fusil.

Cuando el resto de colombianos abrimos los ojos a esa realidad descorzadora, ya era demasiado tarde. El Estado dentro del Estado no se había conformado con las praderas feraces y los atardeceres desgarrados del Magdalena, sino que se expandía y se mimetizaba en los recovecos menos pensados de la nación. Un observador sagaz de nuestras realidades ha dicho que toda la sociedad colombiana está drogada. No por la adicción a la cocaína -que por cierto no es alarmante en Colombia-, sino a una droga mucho más perniciosa: el dinero fácil, la industria, el comercio, la banca, la política, la prensa, los deportes, las ciencias y la artes, el Estado mismo, todos los organismos públicos y privados están enredados de algún modo.
tal vez con pocas excepciones, quizás sin saberlo, y aún de buena fe, en una maraña de intereses creados que ya nadie puede deshacer”(17).

Efectivamente, hay mucho más en la palabra del Nobel Colombiano de lo que quiso decir. Si combinamos en un mapa las zonas donde se combinan masacres de campesinos, aparición de grupos paramilitares entrenados por mercenarios israelíes e ingleses, y zona de inversiones de los narcoterroristas, la “coincidencia” es realmente impresionante.

Con lo anterior, sin embargo, no pretendemos atribuir al narcotráfico la profunda descomposición social de la sociedad colombiana. Esta ya venía desde mucho antes. Para usar las palabras de Giraldo Isaza, “La crisis institucional de la nación no es, solamente, un producto de los narcos. Al contrario, la existencia de una profunda crisis de legitimidad es la que permitió que el narcotráfico pudiera penetrar como penetró a todas las instancias de la sociedad. El narcotráfico sirvió de acelerador de una crisis que venía de antiguo apoderándose de la nación.”(18)

En lo que respecta al impacto en la producción agrícola, este es difícil de evaluar debido a falta de información. A lo más, es posible establecer hipótesis, con base en la evolución de las actividades agropecuarias donde la presencia de los narcotraficantes es ampliamente reconocida.

Si se toman los cultivos comerciales más representativos (ajonjoli, algodón, arroz de riego, banana de exportación, cacao, palma africana, sorgo y soya), en esas secciones (Antioquia, Córdoba, Meta, Santander, Arauca y Casanare), el valor de la producción en tales zonas pasa de un 28.95%, del total a un 32.98% entre 1983 y 1988. Por otra parte, la actividad ganadera no se reduce.

Según el estudio de Sarmiento y Moreno, “las inversiones de los narcotraficantes han producido y siguen produciendo un acentuado proceso de modernización productiva, configurando de paso un programa de “revolución verde”... Los narcotraficantes han venido haciendo realidad en algunas secciones del país, lo que las prédicas (ya pasadas de moda) de los políticos y economistas proponían como alternativa para la Colombia de los años setenta: el modelo neoliberal.”

“Los narcotraficantes, como “Chicago-Boys”, están demostrando que, efectivamente, Colombia cuenta con ventajas comparativas, no solo para la coca sino también para la producción agropecuaria.”(19) Resumiendo todo lo anterior, vemos que en el agro colombiano existe una situación bastante conflictiva, debido a la confluencia de colonos, guerrillas, ejército, narcotraficantes con sus bandas paramilitares, y terratenientes. A lo anterior se añaden elevadas tasas migratorias, débil infraestructura, y una virtual ausencia del estado.

En otros sectores de la economía, también ha tomado lugar un proceso de inserción del narcotráfico, como es el caso con la construcción y con la finca raíz. Según el investigador Fabio Giraldo Isaza, “la presencia de los dineros ilegales en 1987 en el sector fue un hecho. Su magnitud es muy difícil establecerse. FEDELONJAS (“El Sector Inmobiliario en la Economía Nacional”, Nov. 1988, pag. 105) con argumentos no
muy claros llegó a presentar cifras sobre la presencia de la economía subterránea en las ventas de inmuebles usados y fincas rurales que equivocadamente se atribuyeron a movimientos en el sector de la construcción y que algunos medios lo calcularon en la fabulosa cifra de 5.000 millones de dólares, cifra esta que multiplicaba por dos las captaciones acumuladas en el sistema de valor constante en su 15 años de funcionamiento. Más recientemente, Oscar Borrero, con argumento similares a los realizados en el estudio de FEDELONJAS, señaló el impacto de los dólares ilegales en la finca raíz en no menos de 1.000 millones de dólares al año en los últimos diez años” (20) En este estudio se subraya el hecho de la vivienda, y los metros cuadrados aprobados bajo licencia desaparece en 1985, ya las dos curvas comienzan a desplazarse en direcciones opuestas. De hecho, en 1987 se probaron licencias por más de 10 millones de metros cuadrados, y sin embargo hubo una inversión real negativa en el sector edificador. Lo anterior ha llevado a algunos estudiosos del problema a ver una estrecha relación entre la actividad constructura y la economía informal. Se conoce que muchas edificaciones de los narcotraficantes se han construido sin que se exipdan sus respectivas licencias. Toda esa actividad ha introducido serias distorsiones en los precios relativos de la construcción. El caso de los arrendamientos es particularmente patético, ya que los altos niveles ofrecidos por los narcotraficantes y sus allegados ha hecho que estos se hallan hecho inalcanzables para el grueso de la población.

Actualmente hay una verdadera proliferación de construcción de vivienda sumptuaria, aunque por otra parte la participación del rubro “vivienda”, que participaba en cerca de un 75% del total edificado empieza a descender, para llegar a un 62% en 1988.

Las construcciones para actividades comerciales, por su parte, pasan del 5% en 1983-85, a un 9.3% en 1988. Este tipo de construcciones requiere de mayores aportes de recursos propios por parte del constructor; recursos que no son contabilizados en las relaciones con las fuentes de financiación. En general, puede aseverarse que hay una fuerte canalización de fondos de la economía subterránea hacia el sector, llegando a estimarse entre un 2.4% y un 12.3% del total de flujos que ingresaron al país por concepto de narcotráfico en 1988.

Este tipo de análisis sectorial lo podríamos continuar para otras ramas de la economía, aunque allí el seguimiento sería más difícil, debido a que las inversiones del narcotráfico en dichos sectores no han sido tan voluminosas como en los casos de la agricultura, y la construcción y finca raíz, arriba estudiados. Según Kalmanovitz, “Otros negocios que han contado con la participación de miembros de las mafias incluyen bancos, inversiones en combinación con transnacionales, medios de comunicación, tanto radio (aunque el cartel de Cali vendió su grupo Radial Colombiano a una agrupación evangélista en meses pasados) como TV, cadenas de farmacias y algunas industrias. No es posible hacer ningún cálculo, siquiera aproximado, a la posible magnitud de esas inversiones, dada la utilización de testaferros y el secreto que acompaña la mayor parte de las transacciones en el país.” (21)

Hay otro aspecto de la narcoeconomía que es indispensable analizar: el
lavado de dólares. Las formas en que se efectúa tal operación son múltiples, y aquí tan solo destacaremos aquellas que parecen tener mayor impacto macroeconómicó. Estamos de acuerdo con Kalmanovitz al destacar el importante papel que juegan los dólares negros en asegurar la reproducción ampliada de la economía colombiana, dado el tipo de relaciones económicas internacionales que le permite tener.

Según dicho autor, de su estudio se desprende “que el país no está exportando 5.500 millones de dólares como figura en la estadística, sino 10.000 millones de dólares y que el PIB no es de 40.000 millones de dólares sino de unos 46.000 millones de dólares, si se le agrega el valor de las actividades subterráneas. Mientras que el PIB legal creció en la década pasada digamos a 3% anual, el PIB subterráneo pudo crecer a 7% y su dinámica debió contagiar en algún grado a las actividades legales”.

Kalmanovitz concluye que la reducción a cero de los ingresos del narcotráfico trae efectos poco menos que catastróficos a la economía colombiana: “daría al traste con más de un 30% de la capacidad de importadora del país, presionaría las reservas (internacionales de divisas) por las demandas de los que quieren sacar sus capitales del país, se darían movimientos especulativos sobre las importaciones para garantizar inventarios de materias primas durante las épocas de esperado racionamiento, los que importaban de contrabando intentarán luchar por el fondo de divisas que controla el Gobierno para seguir efectuando sus importaciones y este se verá cada vez más impedido para encontrar las divisas con qué abonar el servicio de su deuda. Habría entonces crisis cambiaria, devaluación aguda, inflación más que proporcional, etc. Al mismo tiempo, se reduciría el empleo y el desempleo alcanzaría un 14% o 15% de la fuerza de trabajo” (22). Se cree que la narcoeconomía genera unos 250.000 empleos, lo cual es un 3.3% de una fuerza laboral de 7'500.000 personas. (En el estudio de la organización “A Luchar”, sin embargo, se habla de 500.000 personas vinculadas a la narcoeconomía, lo cual representaría un 8% de la población económicamente activa).

Ahora bien, la importancia de estos recursos para el adecuado funcionamiento de la economía colombiana no se les escapa ni al gobierno de ese país, ni a la banca acreedora estadounidense, la cual, de paso, es una de las principales responsables del lavado de dólares. En el caso del gobierno colombiano, aunque se aparenta para consumo externo una posición intransigente con relación a los narcotraficantes, el hecho real es que, en conjunto con Perú y Bolivia, y han tomado medidas impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, de liberación de cambios, que han llevado a captar y lavar dólares sin problemas morales de ningún tipo. Ya desde la década de los 70 el Banco de la República había establecido un mecanismo especial, conocido popularmente como la “ventanilla siestra”, donde dicha institución adquiere dólares sin indagar por su procedencia.

Otro conocido mecanismo de lavado de dólares utilizado por el gobierno son las compras de oro. Estas eran casi nulas en 1977, año en el cual comienzan a ascender, hasta 1983, cuando sufren un descenso. Desde dicho año hay un incremento acelerado en las compras del mismo. La administración Betancur lo compra en pesos, otorgando primas que
implican un precio superior en un 30% al precio internacional del oro. Esto permite comprar oro en los países aledaños con dólares, y lavar luego los mismos intercambiando el oro por pesos del Banco de la República. Colombia incrementa así sus reservas internacionales de divisas, liberando recursos para importaciones y pago del servicio de la deuda externa. No fue por coincidencia que entre los activos encontrados a Rodríguez Gacha (“El Mexicano”), el poderoso narcotraficante muerto en combate a finales de 1989, se encontraron lingotes de oro en cantidades apreciables.

Cuando el gobierno trata de interrumpir y reglamentar el mercado de narcodólares, los resultados se manifiestan en fluctuaciones aluvionales en la economía. Así, “Cuando el presidente Belisario Betancur (1982-1986) le puso restricciones internacionales pasaron de 4.700 millones en 1981 a 1.000 millones en 1985 (una baja del 75%). De igual manera, cuando el Ministro de hacienda, se dispuso investigar las cuentas bancarias que tuvieran saldos mayores de 6 millones (de pesos): la entrada de dólares en la ventanilla siniestra descendió de un promedio de 50 millones a un millón.” (NARCOTRAFICO Y POLITICA, Documento Mimeografiado del PRT, organización perteneciente a la CGSB). En la actualidad, la “guerra” contra el narcotráfico iniciada a fines de 1989 por la administración Barco, ha resultado en serios problemas para la economía, y el nuevo gobierno de César Gaviria ha reducido un tanto su retórica.

Otras de las formas importantes en que se manifiestan los dólares negros es a través del notable incremento del contrabando (De US$ 150 millones en los 70 a unos US$ 600 millones en la actualidad); la subfacturación de importaciones (comunmente conocida como “correo de las brujas”) a fin de pagar parte de las mismas con dólares negros por debajo del precio oficial, evadiendo de paso el pago de aranceles e impuesto por un orden del 50% del valor negreado; la sobrefacturación de exportaciones a fin de obtener un subsidio de 14% que otorga el gobierno a ciertas exportaciones; y, en general, la posibilidad de que se presencia permite la fácil e inmediata conversión de capitales en pesos a dólares, facilitándose de esta manera su movilidad internacional.

Actualmente se debate mucho sobre la necesidad de la apertura de la economía colombiana, y la nueva administración, de ideología bastante neo-liberal, está tomando algunas medidas en tal dirección. Lo cierto es que la economía colombiana, debido a los dólares negros, ha estado abierta desde hace ya largo tiempo, con las ventas de contrabando representando 15% de las ventas de manufacturas, y 20% de las importaciones no siendo contabilizadas debido al mecanismo del “correo de las brujas”. Se estima que las evasiones de aranceles, impuestos aduaneros, e impuestos a las ventas de importaciones subfacturadas, además del contrabando propiamente hablando ascienden a unos US$ 1.300 millones en 1988, según estimativos de Kalmanovitz.

Puede verse entonces, en todo el panorama arriba presentado, que la presencia de la narcoeconomía en la economía subterránea colombiana ha jugado un importante papel en la evolución de dicha sociedad durante las últimas dos décadas. A pesar de que dichos ingresos
han permitido amortiguar la crisis, no puede afirmarse que sus efectos hayan sido del todo benéficos, como lo atestiguaron los casos de las distorsiones surgidas en los sectores analizados, y el surgimiento de la “enfermedad holandesa” en el caso de la industria. Por lo demás, su efecto corruptor en práctica entre todos los sectores económicos, sociales y políticos es ya ampliamente reconocido.

Esto permitió que en alguna ocasión Fabio Echeverri C., un destacado industrial de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), afirmara que “al sector productivo del país le va muy bien. Pero al país nacional le va mal.” De hecho, ha sido tal la vinculación de todos los sectores a la narcoeconomía, tanto directa como indirectamente, que muchas gentes ni sospechan que mucho de sus actividades económicas dependen en gran parte del estímulo provisto por las actividades del narcotráfico. Para utilizar las palabras del conocido periodista Antonio Caballero, “Más de la mitad de Colombia está vinculada al narcotráfico” (“El Espectador”, septiembre 14, 1989). En lo social y político, el impacto ha sido muy negativo. Ha tomado lugar un creciente proceso de derrumbe de todas las jerarquías sociales, una deslegitimación del poder político acompañado de una intensa corrupción de los aparatos clientelistas de los partidos tradicionales, e inclusive de algunos sectores de la guerrilla a los cuales el narcotráfico ha logrado influir (Cabe destacar, sin embargo, que esto último es un fenómeno más bien margina!, y no generalizado. Quien intentó establecer la amalgama entre la guerrilla y el narcotráfico, no obstante sus obvias y diametralmente opuestas filosofías políticas y sociales, fue el embajador estadounidense durante la administración Betancur, William Tamb. Este personaje se vería vinculado, junto con el Coronel Oliver North, en el escándalo de armas y drogas conocido como el “Trangate”. Más que de narcoguerrillas, sería más apropiado hablar de narcodiplomáticos, y asesinatos a diestra y siniestra de dirigentes políticos, gremiales, y sindicales, que no se sometan a las nuevas alianzas de dineros “sucios” y “limpios” dentro del bloque dominante. En una obra bastante publicitada hace algunos años (Fabio Castillo, Los linajes de la Cocaína, Colombia, 1986), aunque de carácter un poco sensacionalista, se vinculan al narcotráfico a tres presidentes, dos ex ministros de Defensa, algunos hermanos de expresidentes y del presidente para ese entonces en ejercicio, una viuda de expresidente, casi todos los ex ministros de Justicia, senadores, diputados, líderes sindicales, periódicos y cadenas de radio, equipos de fútbol y hasta a un conocido boxeador.

No sabemos en qué grado podemos confiarnos en tal tipo de informaciones. Sin embargo, el hecho de que el libro se haya convertido en un “best-seller" con varias ediciones y una amplia circulación es bastante dicente sobre el clima predominante en esa nación suramericana.

Puede anotarse, para concluir esta ponencia, que el problema es bastante complejo y ciertamente no admite de soluciones simplistas. Desafortunadamente, discutir sobre las mismas rebasaría el marco de este trabajo, y por lo tanto no intentaremos hacerlo. Destacaremos, sin embargo, que debe quedar claro para el lector que soluciones realistas deben ver el problema en forma global, a nivel internacional, y no como

Económicas CUC/55
algo que concierna meramente a los colombianos, al enfatizar únicamente el aspecto de la producción y minimizando el problema de la demanda en las áreas industrializadas del mundo, tal como lo pretenden algunos sectores de los EUA.

NOTAS


(3) Deseamos subrayar que no nos encontramos particularmente confortables en utilizar el calificativo de “narcotráfico”. Como bien es sabido, este término ha sido bastante abusado, y tiene connotaciones que contribuyen a confundir aún más el problema. Desgraciadamente, su uso generalizado, al menos en los escritos provenientes de Colombia, no nos dejan otra alternativa.

(4) Hardinghaus, Nicolás H., Idem, pag. 96.

(5) Idem, pag. 8.

(6) Idem, pag. 12.

(7) Idem, pag. 13.


(9) Idem, pag. 17.


(13) Idem, pag. 18.


(15) Grupo de Investigadores de la CEGA, “Hacia una Política de Tierras”, Economía Colombiana, # 189, enero 1987, Bogotá, pag. 73.

(16) Idem, pag. 20.


(18) Giraldo Isaza, Fabio, Idem, pag. 41.


(20) Idem, pag. 45.

(21) Idem, pag. 21.

(22) Idem, pag. 28.